

Crónica del mes

Diciembre 1980/Enero 1981

El mes de diciembre de 1980 se puede caracterizar como de crisis profunda a todos los niveles y de desmoronamiento del sistema imperante, con un último reajuste para evitar la hecatombe que se viene encima.

Todavía no se habían apagado las protestas por la captura, tortura y asesinato de los seis máximos dirigentes del FDR, cuando se tiene noticia de la desaparición de cuatro norteamericanas (tres de ellas religiosas, y la otra misionera secular) en la carretera que viene del aeropuerto internacional.

En el sitio donde había un retén de los cuerpos de seguridad, y que había detenido anteriormente a otros viajeros, se encontró el vehículo incendiado de las monjas. Así se iniciaba el mes, juntando en un mismo día el sepelio de los dirigentes del FDR y la desaparición de las religiosas norteamericanas.

El Embajador White pide al gobierno el esclarecimiento de los hechos, y su sorpresa se cambia en profunda indignación al enterarse, después, que ya la Junta conocía el asesinato de las capturadas, 24 horas antes de pedirle la investigación, pero que no se le había notificado nada al respecto. En jurisdicción de Santiago Nonualco fueron desenterrados los cadáveres de las misioneras, con muestras de torturas y violación, ante la presencia del Embajador. Los dos jueces de paz que intervinieron en los hechos fueron asesinados en días posteriores. Los desmentidos y condolencias gubernamentales fueron similares a los ofrecidos en situaciones similares; sólo que esta vez los norteamericanos se mostraron más

exigentes, al tratarse de ciudadanos suyos. Fue suspendida la ayuda económica y militar mientras no se esclarecieran los hechos, se derivaran responsabilidades y se sancionara a los culpables, pues "el gobierno de Estados Unidos tenía fuertes sospechas de que habían intervenido los cuerpos de seguridad". Una comisión del más alto nivel fue enviada al país, supuestamente para investigar, en la que sobresalían Rogers y Bowdler.

En el fondo había una profunda crisis política y militar, una división muy marcada, y una descoordinación de acciones políticas, que daba libertad a los distintos grupos para actuar por su cuenta. El triunfo electoral de Reagan había inspirado ánimo y audacia a los sectores de ultraderecha, lo que les indujo a aumentar las acciones sanguinarias y la represión, para hacerse con el control del poder.

Majano había salido del país, sin conocerse ni su destino ni sus objetivos.

Se dirigió primero a Nueva Orleans, pero días más tarde se encontraba con Torrijos y Felipe González en Panamá, y en unas declaraciones conjuntas se exponía la crítica situación del país y el fracaso del 15 de octubre. También fueron publicadas unas declaraciones del canciller salvadoreño Chávez Mena, quien se había encontrado con Majano en Panamá, según las cuales la democracia cristiana le habría puesto un ultimatum de 48 horas a la Fuerza Armada para decidir la crisis, política o militarmente, y en este último caso se retiraría el partido; se pedía la purga en el ejército a los más altos niveles. El desmentido a estas declaraciones no se hizo esperar. Pero,

entre tanto, Duarte hacia un viaje secreto a los Estados Unidos, para pedir ayuda militar al equipo del futuro presidente Reagan.

Al regresar Majano al país se encuentra con una "votación" realizada entre los oficiales y jefes, manipulada y dirigida por el grupo oponente a él, y tras una campaña en su contra como de protector de los comunistas, en la que se había decidido excluirlo de la Junta y dejar sólo a Gutiérrez. A Majano se le nombra Agregado Militar en la Embajada de Madrid, pero no acepta y emite unas declaraciones, ya en la clandestinidad, en las que denuncia la maniobra, la ilegitimidad del nuevo gobierno y la traición al país, a la Fuerza Armada y al 15 de octubre; la votación, dice, ha sido amañada, y sólo han votado 470 de los 700 oficiales, e incluso algunos votos han sido interpretados de forma diversa a como fueron emitidos.

El nuevo pacto de la Fuerza Armada con lo que queda de la democracia cristiana lleva a una reestructuración de la Junta, en el que es nombrado Presidente de la misma Duarte, mientras que Abdul Gutiérrez queda como Vicepresidente y Comandante General de la Fuerza Armada; Morales y Avalos son prácticamente desplazados, pues aunque permanecen en ella, al primero se le encarga la reforma agraria y el ISTA, y al segundo la cartera de Salud. El gabinete sufre pequeños cambios secundarios, permaneciendo la mayoría en sus puestos. Duarte acude, ya en calidad de Presidente de la Junta, primero a Tegucigalpa para ratificar el Tratado de Paz, y luego a Colombia para celebrar el bicentenario de Bolívar. En ambos viajes hace declaraciones sobre la situación del país y la confabulación de la izquierda internacional. Junto con Abdul declaran que la izquierda pierde fuerza, que en enero estará pacificado el país, y que se entregará la Universidad Nacional a sus autoridades en esos meses.

El partido MNR dirige una carta a Duarte, en la que le recuerda sus tiempos pasados y sus luchas democráticas, y le pide reflexione. El FMLN trata de desenmascarar la maniobra, y hace un llamado a la próxima insurrección general. La Iglesia Católica muestra su profunda división: mientras las comunidades de base y grupos comprometidos siguen las líneas de Mons. Romero, otros sectores, y principalmente la jerarquía, se oponen a todo lo que sea popular y revolucionario; Mons. Rivera firma un comunicado del clero y religiosas, en el que se denuncia y con-

dena la persecución a la Iglesia, el asesinato de las religiosas norteamericanas, y la desaparición de los sacerdotes Abrego y Serrano, se acusa al gobierno y a los cuerpos de seguridad, y a la democracia cristiana, bajo cuyo mandato se ha arrejado la persecución y se asesinó a Mons. Romero. Pero días después retiró su apoyo a los sacerdotes belgas que trabajaban en la colonia Zacamil de San Salvador, quienes tuvieron que abandonar el país, aunque uno de ellos se dirigió a los "territorios liberados" para ejercer allí su pastoral.

Por su parte, el FMLN se sigue robusteciendo, no sólo por la militancia y reclutamiento acelerado de sus miembros, sino que también por la incorporación de un nuevo grupo armado, el PRTC. Se comienza a emitir por "Radio Liberación" consignas revolucionarias, y se insiste en el anuncio de la ofensiva final; al mismo tiempo que se intensifican las acciones armadas. Una de ellas va a producir la muerte del norteamericano Thomas Braken, instructor de la Policía Nacional, cuya evidencia de intervención extranjera se apresura a desmentir la embajada y el gobierno norteamericano, con turbias declaraciones en las que se llega a acusar al occiso de que es buscado por contrabando de armas, y que no se tenía noticia de que estuviera aquí y fuera mercenario. Por otro lado, a pesar de que oficialmente se ha suspendido la ayuda militar, el sindicato internacional de estibadores y obreros de depósito, de la costa oeste de los Estados Unidos, se negó a trabajar para los cargamentos militares destinados a El Salvador. Inmediatamente el Departamento de Estado se apresuró a declarar que se trataba de cargamentos atrasados, y que no eran armas letales, sino antimotines, como bombas lacrimógenas, esposas, etc.

Mientras Guatemala, Honduras y Costa Rica son instrumentalizados para apoyar al gobierno salvadoreño, éste intensifica las medidas represivas. Primero se esparcen rumores de que hay, o van a venir, mercenarios para la izquierda, y con esa excusa se intensifican por todas partes los patrullajes, rastreos, cateos, operativos, asesinatos y secuestros, iniciándose lo que se da en llamar "operación limpieza". También se emiten dos decretos: el 508, válido por tres meses, concede amnistía a los izquierdistas que se entreguen, pero no se aplica a los presos políticos, que son aislados en el penal de Santa Tecla para que no concienticen a los demás presos y para prevenir acciones como la huelga de hambre que protagonizaron; el 507 (Ley Especial de Procedimientos Aplicables a



los Delitos a que se refiere el Art. 177 de la Constitución), aplicable a los mayores de 16 años, pasa a tribunales militares toda clase de delitos que tengan algo que ver con la oposición, y establece la arbitrariedad jurídica e incita a la tortura y a la delación, pues cualquier sospecha es válida para mantener 120 días en prisión provisional. Las protestas del Socorro Jurídico y de otras instancias no se hacen esperar, una vez dado a conocer el decreto, que lo fue con mucho retraso.

Como resultado de todo este proceso de represión, en diciembre serán asesinadas 687 personas de la población civil, y 159 serían capturadas. La contrainsurgencia llevaría a 11 invasiones militares a zonas rurales enteras, 27 invasiones militares a cantones y caseríos, 9 bombardeos y ametrallamientos aéreos a poblados rurales, 7 bombardeos de artillería a poblados rurales, 42 operativos militares a zonas urbanas, 4 centros de trabajo militarizados, y 335 casas campesinas destruidas o incendiadas. Por su parte, las organizaciones político-militares de izquierda realizaron 177 acciones de sabotaje, 61 tomas, 186 acciones militares, y 47 otras diversas acciones, en todos los departamentos de la re-

pública. También las organizaciones de masa intensificaron sus acciones por todo el territorio. Los sindicatos, por su parte, aumentaron sus conflictos y presiones socio-políticas. Internacionalmente, en fin, los actos de solidaridad con la izquierda salvadoreña, y de repudio a la Junta, van elevando sus cotas.

Mientras tanto, el caos económico se acentúa en el país, y con visión panorámica del año, además de los indicadores ya explicitados en las crónicas mensuales, se comprueba que la economía ha tenido un fuerte receso, de modo que el PTB ha sufrido un decremento que oscila entre el 9.2 y el 17.7%, y el PTB per capita, asimismo, ha descendido entre un 11.1 y un 19.4%, con lo que se coloca por debajo del PTB global de 1974, y el per capita es inferior al de 1970.

El mes, y el año, pues, se cierra con una profundización de la crisis a todo nivel, que de momento trata de ser subsanada con superficiales cambios, que no aportan soluciones reales. El horizonte que se vislumbra es, por consiguiente, o el de una represión inconcebible, que acabe con la izquierda, o el de una insurrección popular que intente nuevas soluciones.

Se inicia el año con la misma tónica con que terminó 1980. En la Fuerza Armada se han realizado algunos cambios: el Coronel Carranza, de Subsecretario de Defensa fue trasladado a la presidencia de ANTEL, punto clave para las comunicaciones; el anterior jefe del Estado Mayor ocupa el puesto vacante, y es sustituido por el Coronel Flores Lima, que fuera Secretario de Información de la Presidencia con el General Romero y cesó con el golpe del 15 de octubre de 1979; se crea la 4a. Brigada de Infantería, con sede en El Paraíso (Chalatenango), y la 5a. con sede en Sonsonate, aumentando así la tropa y las fortificaciones castrenses. Por otro lado, se da de baja en el ejército a los oficiales Cruz y Fiallos, que se habían asilado en embajadas, y se inicia proceso contra el Coronel Majano.

Los nueve primeros días del mes responden a las declaraciones de Duarte y Gutiérrez, de que la izquierda estaba en retroceso y que para mediados del mes se habría limpiado el país. En este esquema se intensifican las acciones de contrainsurgencia: operativos, patrullajes, cateos, que producen por lo menos 163 muertos entre la población civil. Es sintomático que se cateara a fondo el Ministerio de Educación y la Dirección de Publicaciones del mismo, donde se dijo que había propaganda subversiva, y se detuviera a numerosos empleados. Se montaron vastos operativos militares en el volcán de San Salvador y en el cerro de Guazapa, así como en Usulután, San Miguel, La Unión y Sonsonate, para acabar con la izquierda. También se denunció el ingreso al país de numerosos ex-guardias nicas, que fueron repartidos por los diferentes cuarteles. Dentro de este contexto se entiende el asesinato de Rodolfo Viera, Secretario General de la UCS y Presidente del ISTA, junto con dos asesores norteamericanos, miembros de IADSL, en el hotel Sheraton, con plena impunidad a pesar de estar fuertemente protegido por ser sede de los asesores americanos y de los restos de la alta burguesía.

Por su parte, Radio Liberación y Radio Venceremos hacen más insistentes llamados a la "ofensiva final", y el FDR es reestructurado, siendo elegido Presidente el Dr. Ungo, y como Vicepresidente el Ing. Calles, al tiempo que se crea un secretariado operativo más simplificado. Asimismo se incrementan las presiones y las huelgas sindicales.

En este contexto, el día 10 de enero la izquierda desencadena lo que llamó "ofensiva general" con ataques militares en todo el territorio nacional, de los que los más sobresalientes parecen haber sido el ataque a la fuerza aérea, la toma del cuartel de Santa Ana (2a. Brigada de Infantería), donde un oficial y toda su compañía se pasaron a los rebeldes, quemaron el cuartel y dieron muerte al jefe de la guarnición que estaba al mando en ese momento, y la toma de numerosas ciudades, las más importantes: Santa Ana, Chalatenango, Suchitoto, Zacatecoluca y Santa Rosa de Lima. Simultáneamente se convocó una huelga general, que si no obtuvo todo el apoyo esperado, ciertamente paralizó en gran parte el aparato productivo, pues cuando menos 41 sindicatos y asociaciones laborales la secundaron, 12 de ellas del sector público. Por su parte, el FDR nombró una Comisión Político-Diplomática, constituida por Guillermo Manuel Ungo, Salvador Samayoa, Rubén Zamora, Fabio Castillo, Mario Aguiñada, Napoleón Rodríguez Ruiz y Ana Guadalupe Martínez, como representantes de los distintos grupos que lo integran. Los oficiales Mena y Cruz se unieron a los insurrectos en occidente, y el Coronel y Dr. Bruno Navarrete lo hizo en oriente. Majano hizo declaraciones desde la clandestinidad, acusando al gobierno y a la Fuerza Armada de ilegales y de estar manchados de sangre del pueblo; algo similar hizo Bruno Navarrete; el Subsecretario de Planificación, Carlos Federico Paredes Castillo, en su renuncia acusa al gobierno de ingenuo y de estar sostenido oficialmente desde fuera; Miguel Angel Granillo, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, también renuncia al cargo por razones similares; Ro-

dolfo Castellanos, Embajador en Managua, se pasa a la guerrilla para luchar con el pueblo y contra la Junta ansiosa de poder, y sostiene que el ejército no controla muchas partes del país; finalmente, también Nelson Romero, Director General de INCAFE presenta su renuncia.

La primera reacción del gobierno y de la Fuerza Armada fue de sorpresa y de haber sido golpeados duramente; de tanto repetir la debilidad de la izquierda, parece que ni sospechaban la capacidad militar que tenía. Todo el discurso se centró en denigrar a los militares que se habían pasado a los insurrectos, en afirmar que la ofensiva había tenido poca importancia, que era muestra de la desesperación de la izquierda, y que la situación estaba totalmente controlada; en fin, que era consecuencia de un complot comunista internacional, para lo que adujeron las siguientes pruebas: un supuesto desembarco de lanchones nicas en El Cuco; la presentación de un piloto costarricense capturado en el país al traer armas y al que no se le podía hacer preguntas de parte de los periodistas, se afirmó que las heridas e hinchazones que presentaba en la cara y cuerpo eran consecuencia, al intentar huir, de esquivarlas de una granada; y, por último, la noticia de que se había estrellado un avión nicaragüense

en Usulután, a consecuencia de lo cual fue detonada una bomba en la embajada de dicho país.

Inmediatamente se puso en marcha todo el aparato represivo del sistema: se decretó la Ley Marcial y el Toque de Queda en todo el territorio, desde las 7 de la tarde hasta las 5 de la mañana; se impuso la Cadena Nacional de Radio y Televisión; se comenzó a restringir la tarea de los periodistas y a perseguirlos (un venezolano fue apresado y otro desaparecido, una mina hirió a dos fotógrafos y camarógrafos de TV y UPI, uno de los cuales murió poco después, desapareció otro norteamericano, fue herido un corresponsal francés; fue atacada y cateada la agencia API, capturados varios empleados, y el director, Jorge Pinto, junto con su familia y algún empleado, tuvo que asilarse en una embajada). Fue secuestrado el Secretario Administrativo de la Comisión de Derechos Humanos, Víctor Medrano; fue tomada militarmente la UCA; apresado el sacerdote mexicano César Arturo Martínez Sánchez (entregado después al encargado de negocios de su país); fueron militarizados varios centros de trabajo, y se intensificaron los cateos por todas partes. Simultáneamente se lanzó por el mundo una "ofensiva de paz", por medio de delegaciones oficiales que fueran a distintas naciones a



presentar el punto de vista del gobierno sobre la situación del país y la conspiración comunista internacional.

Pero, como siempre, lo más duro de la represión se centró en lo militar y, también como siempre, en la población civil: si en los primeros días del mes se contabilizaron 163 muertos, del 10 al 31 sólo en la población civil se elevaron a 2,000 (1,018 de ellos, campesinos), y 170 asesinados con la excusa del Toque de Queda (de ellos, 4 maestros), para elevar a 2,333 la cifra de muertos de la población civil en el mes; también hubo 149 capturados. Sólo en los días siguientes al alzamiento, en Santa Ana fueron asesinados 97 (se dijo que era un campamento guerrillero, pero se esclareció que muchos eran civiles capturados anteriormente, y entre ellos había profesionales y una religiosa), en Tecoluca 100 campesinos, en San Francisco Gotera 800, en su mayor parte campesinos. Los refugiados, tanto en los centros del país como en el extranjero, se elevaron a muchos miles. 124 acciones de contrainsurgencia fueron realizadas en el mes: 12 invasiones militares a zonas rurales enteras, 7 invasiones militares a cantones y caseríos, 8 bombardeos aéreos y de artillería a poblaciones rurales y urbanas, 34 operativos militares a zonas urbanas, 23 cateos, etc., 4 ametrallamientos y atentados dinamiteros, 3 militarizaciones de centros de trabajo, 23 ataques aéreos a posiciones del FMLN, 4 ataques de artillería a dichas posiciones, y 6 descubrimientos de campamentos, células o talleres del FMLN.

La posibilidad de un triunfo de la izquierda puso en funcionamiento todos los apoyos e intereses que peligraban, tanto en el interior como al exterior. La empresa privada expresó su apoyo y confianza incondicional e irrestricta al gobierno y a la Fuerza Armada, lo mismo que el partido POP. La jerarquía eclesiástica se pone incondicionalmente al lado del gobierno y en contra de la CONIP, a la que con su acusación provoca a denunciar la carencia de autoridad moral de los obispos, dada su trayectoria política contra el pueblo. Mons. Rivera hace el juego al gobierno, al intentar ubicarse en un centro inexistente, atacar por igual a ambas extremas (tesis del gobierno), y deslegitimar la insurrección.

Pero serán los Estados Unidos los que desde ese momento tomen las riendas de El Salvador, al que convierten en una auténtica colonia. El invento del desembarco de los lanchones es secundado por el Embajador White, para así lograr la aprobación de una ayuda militar (todavía en tiempos

de Carter). Inmediatamente afluyen al país pertrechos de guerra, asesores militares, ayuda económica, y se toma la dirección político-diplomática. De nada sirven las manifestaciones y protestas de diplomáticos, periodistas, iglesias, pueblo americano, y toda clase de instancias internacionales. Posteriormente White sería retirado de la embajada por oponerse a la ampliación de la ayuda militar, pero fue él quien la inició. Al mismo tiempo, los Estados Unidos mueven a todos sus peones para apoyar a la Junta: Guatemala y Honduras (de las que se denunció su participación militar), Costa Rica, la empresa privada del área, Venezuela, la ODCa, y hasta Jamaica; el mismo Perú proporcionará su barco "Cuzco", para transportar tanquetas y armas italianas a El Salvador, lo que provoca la oposición de los estibadores italianos y españoles a proporcionar asistencia a dicho barco. Las protestas al interior de los Estados Unidos recuerdan las equivocaciones en Vietnam e Irán, y sostienen que su gobierno siempre se ha puesto a favor de los dictadores y del lado equivocado, pero la nueva dirección de Washington se hace sorda a tales clamores.

Al intentar hacer una evaluación de la "ofensiva general", es preciso considerar diferentes aspectos. La acción militar de los insurgentes fue parcialmente exitosa, y tomó por sorpresa al gobierno, a pesar de los reiterados anuncios; 595 acciones militares del FMLN fueron realizadas a partir del 10 de enero, dispersas por todos los departamentos de la república, y de no haber sido por la inmediata ayuda militar americana, es posible que en pocos días hubieran acabado con el poder establecido; por el contrario, y a consecuencia de esto, tuvieron que replegarse y fortalecer sus posiciones iniciales. Por otro lado, la respuesta de las masas y de los trabajadores no fue la esperada, a pesar de la euforia inicial. Esos son los datos, que han de interpretar.

La dirigencia del FMLN también hizo su evaluación de los hechos: reconoció las fallas habidas, la falta de coordinación, de comunicación y de experiencia, y le añadió una alta dosis de ideologización, calificándola como de éxito, de escuela de aprendizaje, de autocrítica, de repliegue táctico, etc. Pero, en el fondo, o no pretendían tomar el poder en esa ocasión, o no pudieron —no queda suficientemente claro—, y hoy plantean nuevas estrategias y mayor apertura a la negociación, lo que podría denotar cierta debilidad, a no ser que la negociación viniera forzada por una clara superioridad militar que habría de

demostrarse en ulteriores acciones contundentes, pues de lo contrario no se les admitiría a la mesa de negociaciones.

Ya se expuso la evaluación del gobierno y las reacciones a la ofensiva. La verdad fue la búsqueda desesperada del apoyo americano, la invención del desembarco, como excusa, y la entrega incondicional de las riendas a los del norte en todos los aspectos.

Pero el conflicto se elevó al plano de la internacionalización. Se ha denunciado la participación de los ejércitos guatemalteco y hondureño, así como de exguardias nicaraguenses. La intervención americana es innegable e innegada, como si de una colonia se tratara, no sólo en lo militar, sino en lo político y diplomático. Los Estados Unidos acusan de intervención y ayuda a los países socialistas, en especial a Rusia y Cuba, que utilizan a Nicaragua como vehículo, con lo que se trata de estrangular a este país, y se le suspende la precaria ayuda crediticia concedida tras tantos forcejeos. Al mismo tiempo se detiene en USA a varios nicaraguenses (entre ellos el jefe de la fuerza aérea), con la acusación de intentar sacar fraudulentamente dos helicópteros. El gobierno nicaraguense, ante el temor de verse envuelto en el conflicto, llama al pueblo a incorpo-

rarse en las milicias populares, para defenderse de posibles invasiones y del incremento de la contrarrevolución que ya se ha desatado. Pero también la solidaridad internacional se mueve por todas partes, y se realizan 118 acciones de diverso tipo en apoyo al pueblo salvadoreño y en denuncia y repudio al gobierno, al genocidio y a la intervención norteamericana. Numerosos gobiernos europeos y americanos piden la no-intervención, o denuncian el genocidio y la violación de los derechos humanos. Incluso el demócrata cristiano italiano Lousi Granel, preocupado por los acontecimientos y por el exterminio del pueblo salvadoreño, pide una urgente reunión de Willy Brandt y Mariano Rumor (Presidentes de la Internacional Socialista y de la Democracia Cristiana Internacional, respectivamente), para encontrar solución al problema de El Salvador (la DC internacional reconoce los errores cometidos por la DC de aquí) y lograr la autodeterminación.

Al caos social y político se suma, como no podía ser menos, el caos económico. Si ya en el año 1980 la economía había sufrido una gran recesión, la conflictividad y la guerra civil desatada en enero de 1981, mes en que todavía no estaban levantadas en su totalidad las cosechas y en el



que los paros y las huelgas se incrementaron, tuvo que agudizarse. A esto hay que añadir el que el café tiene precios muy bajos en el mercado internacional, a El Salvador se le redujo la cuota de exportación, y la roya ha seguido avanzando en las plantaciones. También la caña de azúcar se ha visto afectada por la plaga "carbón". El gas propano ha escaseado en el mes, así como las medicinas y la posibilidad de atención hospitalaria; faltan por lo menos 600,000 viviendas (240,000 urbanas, y el resto rurales); y, según datos oficiales, en los dos últimos años se han sacado 1,500 millones de dólares del país.

El nuevo presupuesto nacional incrementa enormemente el dinero asignado a defensa y seguridad, y disminuye el porcentaje destinado a los servicios sociales y a la inversión, no tanto a imitación del modelo Reagan, cuanto urgido por la situación conflictiva y de guerra en que se encuentra el país. En estas condiciones, y con la recesión económica, la salida es la creación desorbitada de moneda, la búsqueda de ayudas y préstamos externos, y el incremento de los impuestos. En este último rubro, se dictan una serie de decretos: como el 537, que duplica el impuesto de papel sellado y timbres; el 76, que exige una tar-

jeta de identidad a los menores de 18 años, con lo que se espera controlar a la juventud y recaudar algunos fondos monetarios; el 544, que pretende una estabilización económica, congelando precios y salarios; el aumento al precio del aguardiente, uno de los importantes rubros de recaudación de impuestos; la extensión del impuesto de renta y vialidad a los pagos, bonos e intereses de propiedades afectadas por la reforma agraria (que todavía no se han pagado); o la subida escandalosa de las tarifas de ANDA. Todas estas medidas suscitan las protestas de los consumidores y de la empresa privada, a la que logra nuevamente enajenarse el gobierno.

En fin, el mes de enero nos ofrece un panorama de lo más siniestro: un caos total en todos los aspectos de la realidad nacional; una guerra que en la primera jugada arrojó un resultado en tablas; una pérdida de independencia y dignidad nacional a manos de un imperio que ha tomado las riendas del país; y unos dolores de parto que no se sabe si presagian la muerte de la madre o el nacimiento de una criatura llena de vida.

Eugenio C. Anaya, h.

